



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-005-2022-00015-01 (O2-22-363)
Accionante: JOSÉ IVÁN GUTIÉRREZ YATE
Accionada: COLPESIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 73
Asunto: PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ – HIJO(A) INVÁLIDO(A)

En Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-005-2022-00015-01 (O2-22-363), instaurado por JOSÉ IVÁN GUITÉRREZ YATE en contra de COLPESIONES E.I.C.E., con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por la accionada COLPENSIONES E.I.C.E., así como el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de la entidad pública accionada en lo desfavorable, respecto de la sentencia que cerró la primera instancia, proferida el 06 de septiembre de 2022 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El señor JOSÉ IVÁN GUITÉRREZ YATE actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por hijo(a) inválido(a) a partir del 03 de

noviembre de 2020, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas.

En respaldo de sus aspiraciones señala que nació el 08 de noviembre de 1969 y que efectuó aportes para pensiones a partir del 22 de noviembre de 1993, acreditando en su historia laboral un total de 1.347 semanas. Señala que continua activo al SGSSP pagando las cotizaciones de ley. Relata que el 21 de diciembre de 1991 contrajo matrimonio con la señora MARÍA ESPERANZA MURILLO OSPINA, y de cuya unión nacieron sus hijas MARIANA GUTIÉRREZ MURILLO y YERALDIN GUTIERREZ MURILLO. Añade que, la primera de sus hijas *“...desde la fecha de su nacimiento padece de un retraso mental moderado: deterioro del comportamiento, el cual fue calificado por COLPENSIONES mediante el Dictamen Nro. DML 3524271 del 21 de septiembre de 2020, asignándole una invalidez del 70% estructurada el día 7 de abril de 2003...”*

Pone de presente que su cónyuge padece quebrantamientos en su estado de salud, no labora y siempre se ha dedicado a las actividades del hogar, aseverando que no puede atender a su hija MARIANA GUTIÉRREZ MURILLO por no tener las fuerzas suficientes para ello. Cuenta que *“...su hija mayor YERANDIN(sic) GUTIÉRREZ MURILLO, identificada con la C.C. 1.036.640.758, ya tiene un hogar conformado y por lo tanto no vive con la demandante ni tampoco tiene la forma de ayudar con el cuidado personal de su hermana discapacitada...”*, razones que determinaron elevar ante la accionada la solicitud de reconocimiento pensional especial, para así atender las necesidades de su hija en situación de discapacidad. Sin embargo, la administradora del RPMPD negó la prestación económica bajo el argumento que no se acreditó la condición de padre cabeza de familia; decisión contra la que interpuso los recursos de ley, los cuales fueron resueltos en desmedro de sus intereses.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 11 de febrero de 2022 (doc.05, carp.01), y se notificó a la demandada COLPENSIONES E.I.C.E., el 17 de febrero de ese mismo mes y año (docs.06 y 07, carp.01), dándose aviso de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en esa calenda (doc.08, carp.01), y a la Procuradora Judicial Delegada en Asuntos Laborales el 21 de febrero de 2022 (doc.09, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E., al momento de dar respuesta al escrito incoativo aceptó como ciertos los hechos que hacen referencia a la fecha de nacimiento del accionante, la fecha de afiliación al sistema pensional, la densidad de semanas cotizadas, la relación filial con la joven MARIANA GUTIÉRREZ MURILLO, el diagnóstico y la PCL otorgada. De igual modo, no

cuestionó la reclamación administrativa presentada ni la respuesta brindada a la misma; a los demás hechos respondió que no le constaban. Así se opuso a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que postuló como inexistencia de la obligación de pagar pensión especial de vejez, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, prescripción, imposibilidad de condena en costas, compensación y la genérica (doc.12, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 06 de septiembre de 2022 (docs.18 y 19, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió condenar a la enjuiciada COLPENSIONES E.I.C.E. al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez en favor del promotor de la litis, disfrute que sujetó a la verificación del retiro del SGSSP del pretensor. Asimismo, absolvió a la accionada de los intereses de mora consagrado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no sin antes, gravar en costas a COLPENSIONES E.I.C.E., en favor del promotor del juicio.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado adujo que el actor acreditó los requisitos de que trata el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y que corresponden a la densidad mínima de semanas cotizadas, el estado de invalidez de su hija MARIANA GUTIÉRREZ MURILLO y la dependencia económica de esta, destacando que no es requerido acreditar la condición de padre cabeza de familia para el reconocimiento pensional, con apoyo en pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia (minuto 01:47:15 a 03:02:44, doc.18, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

La apoderada judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. impugna la decisión adoptada a fin de que se revoque integralmente la misma, con el argumento de que a pesar de que el accionante demostró la condición de inválida de su hija y más de 1.347 semanas cotizadas, no es menos cierto que la joven MARIANA GUTIÉRREZ MURILLO no depende de aquel, resaltando además de que las deficiencias en su estado de salud se relacionan sólo a episodios de crisis, pudiendo desarrollar actividades por sí misma. A este respecto, trajo a colación las sentencias SL12931 de 2017 y SL17898 de 2016 de la Corte Suprema de Justicia (minuto 03:02:44 a 03:05:44, doc.18, carp.01).

1.4. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia fue adversa a los intereses de COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de aquella y en los puntos en los que no fue objeto de alzada.

1.5. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta se admitieron el 03 de octubre de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 10 del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1o del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del precedente.

La vocera judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. (doc.04, carp.02), presentó las alegaciones pertinentes solicitando se revoque la decisión proferida por el *a quo* y, en su lugar, se declare probada la excepción de mérito de inexistencia de obligación, transcribiendo el texto completo de las razones de la defensa consignadas en el escrito de contestación que hacen referencia a los requisitos de esta prestación pensional y el no cumplimiento de la exigencia de demostrar la dependencia económica.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES E.I.C.E., advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada además de ocuparse de los puntos de inconformidad materia de alzada, se examinará en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES E.I.C.E., en los puntos en los que no fue objeto de impugnación.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si al señor JOSÉ IVÁN GUTIÉRREZ YATE le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez por encontrarse al cuidado de su hija inválida a partir del 03 de noviembre de 2020, efecto para el que será necesario establecer cuáles son los requisitos que el afiliado debe acreditar para la causación y disfrute de la referida prestación, con arreglo a los preceptos normativos y criterios jurisprudenciales que rigen la materia. Así también la Sala se ocupará

de resolver los cuestionamientos que se presentaron frente a la exigencia de la dependencia económica y la condición de padre cabeza de familia que se alegó desde la contestación al libelo genitor.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará la decisión de primer grado, en tanto que, de acuerdo con la intelección del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, los requisitos que debe acreditar el afiliado para acceder a la pensión especial de vejez por hijos inválidos se circunscriben a : i) Haber cotizado al Sistema General de Pensiones cuanto menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez; ii) Que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada, y iii) Que la persona discapacitada sea dependiente de su madre - o de su padre, si fuere el caso; no resultando necesario demostrar una dependencia exclusiva a uno de los progenitores (madre o padre cabeza de familia), como tampoco, que el cuidado recaiga únicamente en el padre solicitante.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos en primera instancia: que el señor JOSÉ IVÁN GUTIÉRREZ YATE nació el 08 de noviembre de 1969 (págs.19 a 20, doc.03, carp.01; subcarp.01, carp.01);

que al mes de marzo de 2021 acredita en su historial laboral un total de 1.347 semanas cotizadas (págs.50 a 64 y 73 a 88, doc.03, carp.01); que solicitó el reconocimiento de la pensión especial de vejez el 03 de noviembre de 2020 (págs. 47 a 64 y 73 a 88, doc.03, carp.01), y que contrajo matrimonio con MARÍA ESPERANZA MURILLO OSPINA el 21 de diciembre de 1991 (págs.03, doc.03, carp.01).

Adicionalmente, no se cuestionó la relación filial con la joven MARIANA GUTIÉRREZ MURILLO y la PCL del 70% que le fue otorgada por la administradora del RPMPD el 21 de septiembre de 2020 en razón de la patología denominada *“retraso mental moderado deterioro del comportamiento”* que la afecta desde su nacimiento (págs.23, 29 a 47 y 89 a 96, doc.03, carp.01).

2.3.1 De la Pensión Especial de Vejez por Hijo(a) Inválido(a)

El Sistema Integral de Seguridad Social fue concebido como *“el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, a disposición de las personas y la comunidad entera para garantizar un nivel de calidad de vida digna, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura integral a todas las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”* (Ley 100 de 1993, preámbulo).

El Sistema General de Pensiones, fue a su vez diseñado para garantizar a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica periódica denominada pensión, otorgada por la entidad administradora del régimen a la que se hubiere vinculado el afiliado, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que resultare aplicable (artículo 1º de la Ley 100 de 1993).

Ahora, en lo que concretamente concierne a la prestación económica reclamada en esta oportunidad, es del caso memorar que el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, reza:

La madre trabajadora cuyo hijo padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá

pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo. -Negrita intencional de la Sala-

El ejercicio de hermenéutico de esta disposición permite inferir que, esta prestación pensional es de carácter especial, teniendo como finalidad principal exceptuar del requisito de edad mínima para la causación del derecho pensional ordinario, al padre o madre que, habiendo alcanzado la densidad mínima de semanas exigida en el régimen de prima media, se encuentre al cuidado de su hijo discapacitado.

En consonancia con la doctrina asentada por la Corte Suprema de Justicia¹, esta prestación tiene como objetivo angular *“...que el afiliado no se vea obligado a continuar trabajando y así, dedicarse al cuidado del hijo en condición de discapacidad, teniendo la posibilidad de acceder a una pensión que le permita cumplir de manera digna con sus obligaciones familiares y alimentarias establecidas legal y constitucionalmente...”*; lo cual que se alinea con lo sostenido por la Corte Constitucional en sentencias C-224 de 2004 y C-989 de 2006, en donde elucidó que la finalidad de esta pensión especial no es otra que *“...facilitarles a las madres el tiempo y el dinero necesarios para atender a aquellos hijos que están afectados por una invalidez física o mental, que no les permita valerse por sí mismos, y que dependen económicamente de ellas. Con el beneficio creado por la norma se espera que las madres puedan compensar con su cuidado personal las insuficiencias de sus hijos, para impulsarlos en su proceso de rehabilitación o para ayudarlos a sobrevivir en forma digna”*.

En este derrotero, precisa la Sala que la prestación pensional descrita se extiende a su vez al padre afiliado al SGSSP, en atención a que *“...i) el inciso 2.º del párrafo 4.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003 no establece esa exigencia, ni mucho menos puede ser interpretado restrictivamente y en disfavor de los intereses pensionales de los afiliados y aún del propio hijo inválido; (ii) la norma no puede tener el efecto de liberar de las obligaciones familiares y alimentarias a los padres, por tanto, es factible el soporte económico de ambos padres; y (iii) la idea que subyace a la pensión especial de vejez es que el progenitor abandone su vida laboral para dedicarse al cuidado pleno de su hijo, de lo cual puede inferirse también que la dependencia del hijo respecto al padre o madre debe ser preponderantemente económica”*².

En síntesis, para ser beneficiario de esta prestación pensional especial el afiliado debe i) Traer la prueba de haber cotizado la densidad mínima de semanas reclamadas en el SGSSP (RPMPD) para acceder a la pensión por vejez; ii) Que el hijo del afiliado padezca una disminución en su estado de salud en su dimensión física, social o mental que lo ubique como

¹ Sala de Casación Labora, Corte Suprema de Justicia, sentencia SL4770 de 2021.

² Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, sentencias SL17898 de 2016, SL1991 de 2019 y SL3772 de 2019.

invalido³, y iii) Que la persona discapacitada dependa económicamente del progenitor beneficiario de la prestación.

Bajo las anteriores premisas normativas y jurisprudenciales, está suficientemente demostrada en el caso *sub lite* la prueba de la densidad de aportes a la que se hizo mención en el punto inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que COLPENSIONES E.I.C.E. en Resolución No. SUB105133 del 5 de mayo de 2021 reconoció que el pretensor a esa data contaba con 1.347 semanas cotizadas, en tanto que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, fijó el requisito mínimo de cotizaciones en el RPMD en 1.300 semanas.

En línea con lo anterior, refulge palmar la satisfacción de la relación filial del suplicante y el estado de invalidez de la joven MARIANA GUTIÉRREZ MURILLO como segundo presupuesto, teniendo en cuenta el registro civil de nacimiento adosado al cartulario (pág.22, doc.03, carp.01) y la PCL de 70% que le fuera asignada por parte de COLPENSIONES E.I.C.E. (págs.29 a 47, doc.03, carp.01; subcarp.01, carp.01) y que, a todo esto, no fue discutida. En este punto, la Sala descarta *in limine* los cuestionamientos al estado de salud de la hija del gestor a los que se hizo alusión en la alzada, toda vez que el hecho puro y simple de que la joven GUTIÉRREZ MURILLO pueda valerse por sí misma en algunos aspectos de su vida diaria no desdibuja la patología de “*retraso mental moderado deterioro del comportamiento*” que sufre desde su nacimiento ni el alto porcentaje de PCL que le fue asignado por los profesionales de la medicina laboral.

En punto de la dependencia económica del padre que aspira a ser beneficiario de esta prestación y su hija en estado de discapacidad, se practicaron e incorporaron al tracto procesal el testimonio de las señoras MARÍA ESPERANZA MURILLO OSPINA y ANA LUCÍA HERNÁNDEZ, junto con el interrogatorio del actor.

La señora MURILLO OSPINA afirmó que es esposa del demandante señor JOSÉ IVÁN GUTIÉRREZ YATE y madre de la joven MARIANA GUTIÉRREZ MURILLO y en ese sentido relató que es ama de casa y convive en el mismo inmueble con aquellos. Frente al estado de discapacidad y el cuidado de su hija, afirmó que aquella necesita estar siempre acompañada y que es ella como su madre quien generalmente se encuentra a su cuidado, apoyándose también el accionante en su cuidado, debido a la necesidad de fuerza física para el control de las crisis que sufre por motivo del peso de la joven y aun los episodios de coma consciente que experimenta y que le producen vómito en horas de la noche.

³ Debe tenerse en cuenta que el hijo del afiliado debe encontrarse debidamente calificado con una PCL igual o superior al 50%.

En lo que respecta a las crisis de su hija, informa que las mismas están relacionadas con el estado de ánimo. Resalta que, si bien su hija se encuentra estudiando, esta actividad es solo para mantenerla ocupada, pero en la realidad no es evaluada académicamente, pues el proceso de aprendizaje no es el habitual para una niña de esa edad. Agregó que cuando no presenta episodios críticos, su hija puede vestirse y bañarse por sus propios medios.

Por su parte, la señora ANA LUCÍA HERNANDEZ narró que conoce al núcleo familiar, constándole que el demandante es quien aporta los recursos económicos para solventar las necesidades del hogar, y que la señora MARÍA ESPERANZA MURILLO OSPINA se encarga con su esposo, del cuidado de la hija en común. Lo que sabe y le consta porque es vecina de la pareja por un lapso de 18 años. Preciso que la señora MURILLO OSPINA es ama de casa, lo que deduce por observarla a diario en la casa. También contó que es difícil la movilización de la joven MARIANA GUTIÉRREZ OSPINA pues no puede tomar el transporte en bus porque se marea y le produce vómito, debiendo trasladarse a pie o en taxi. De las condiciones del estado de salud, puso de presente que tiene un trastorno que la lleva a un coma inducido, así también problemas de lenguaje y de atención, por lo que requiere una vigilancia constante. Finalmente aseveró que la mencionada joven MARIANA GUTIÉRREZ se encuentra cursando algunos estudios de virtuales y puede realizar algunas actividades por sí misma como vestirse.

El demandante confesó que vive con su esposa MARÍA ESPERANZA MURILLO OSPINA y con su hija MARIANA GUTIÉRREZ MURILLO en una casa que tiene afectación de patrimonio de familia; que su hija estudia en la modalidad virtual por cuanto de modo presencial sufría de *bullying*, requiriendo cuidados constantes por motivo de su enfermedad y de las crisis que padece, a pesar de que sea capaz de vestirse por sí sola. Aclaró que los cuidados de su hija están a cargo de su esposa y del suyo propio cuando llegaba de trabajar y en el momento de las crisis, destacando que el sostenimiento del hogar y la provisión de los recursos económicos están solo a su cargo. Puntualizó que las crisis de su hija se presentaban con vómitos y convulsiones constantes que la mantienen en cama inmovilizada, por lo que debe acudir a su casa para desplazarse con ella a urgencias pues su esposa no tiene la fuerza física para cargarla.

Analizadas las testificales arriba descritas, para esta Sala de Decisión, en el *sub studium*, constituye un hecho irrefutable que en efecto el actor es quien provee los recursos económicos para subvenir las necesidades básicas y de sostenimiento del hogar conformado por su esposa y su hija discapacitada, atendiendo también el cuidado de su hija cuando culmina su jornada laboral o bien cuando se presenta una crisis que requiere el traslado al servicio de urgencias, y así lo aseveraron de manera responsiva, coherente y coincidente las señoras MARÍA ESPERANZA MURILLO OSPINA y ANA LUCÍA HERNÁNDEZ, declaraciones que al punto,

merecen total credibilidad en razón a que explicaron la ciencia de su dicho, la primera en su condición de cónyuge y madre, y, la segunda por la relación de vecinos por un periodo de 18 años aproximadamente, lo que supone que cuenta con un conocimiento directo e inmediato de los hechos. Siendo ello así, fuerza concluir que, en efecto, es imprescindible la contribución económica del demandante para garantizar a su hija el sostén y suministro de lo necesario para suplir sus necesidades básicas.

Es por ello que, sin hesitación alguna, se muestra acertado, como lo coligió el *a quo*, reconocer el derecho pensional especial por hija inválida a favor del señor JOSÉ IVÁN GUTIÉRREZ YATE, ante la evidente concurrencia de los requisitos contemplados en la legislación y que fueran atrás explicados con suficiencia.

Como corolario de lo expuesto, no merece reparo alguno la decisión revisada en derredor al cumplimiento de la relación de dependencia económica entre el afiliado y su hija discapacitada, pues contrario a lo mencionado por COLPENSIONES E.I.C.E. en la sustentación del recurso de impugnación y aun en las argumentaciones a las que acudió en el acto administrativo para hacer nugatorio el derecho pensional solicitado, este requisito reclama la demostración de la denominada *subordinación financiera* y no el cuidado exclusivo de su hijo inválido.

En orden a lo anterior, constituye un contrasentido exigir del afiliado el suministro de los recursos económicos para el sostenimiento del hijo inválido a la vez de ser quien proporcione los cuidados de manera unitaria, por motivo que, es precisamente el fin de esta prestación especial permitir que el beneficiario pueda retirarse de su trabajo para atender los cuidados de su hija(o). Por consiguiente, insistir en esta postura desconoce abiertamente el esfuerzo argumentativo que de manera pacífica y reiterada ha delineado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al apuntalar:

El punto que controvierte la censura, ya fue objeto de pronunciamiento de esta Sala en un caso de similares contornos. En la sentencia CSJ SL3772-2019, esta Corporación enseñó:

[...] la dependencia del hijo en estado de discapacidad referida a la necesidad afectiva y psicológica de contar con la presencia, el cariño y el acompañamiento de sus progenitores, es connatural a los lazos familiares, mientras que la subordinación económica es una exigencia legal a efectos de obtener el derecho a la pensión especial de vejez; entonces, la dependencia que se debe demostrar es la económica.

Y es que de esa manera, es que se arriba al objetivo principal de tal beneficio pensional, esto es, el de proteger al hijo afectado por una discapacidad física o mental, pues es en virtud de esa prerrogativa que los progenitores tendrán la posibilidad de atenderlos y compensar con su cuidado personal la disfunción que padecen, impulsar su proceso de rehabilitación y ayudarlos a vivir de forma digna sin que su ingreso económico se afecte.

*Luego, es contradictorio exigir esa doble dependencia -económica y de acompañamiento o cuidado- para acceder a la pensión especial, por cuanto padre y madre están en la obligación de responder económicamente por sus hijos -menores o inválidos-, lo que necesariamente implica el desarrollo del rol de trabajador que, en cualquiera de sus formas, impide el cuidado **exclusivo** de su descendiente en condición de discapacidad.*

En tal dirección, la Sala debe señalar que parte del correcto entendimiento en la utilización de las reglas interpretativas excluye una aplicación aislada y descontextualizada del fin último de las normas; por tanto, una correcta aplicación de la hermenéutica jurídica implica necesariamente hacer un análisis de dicho fin, de manera conjugada y armonizada, en aras de esclarecer el verdadero sentido y espíritu de las disposiciones legales.

(...)

Y es que admitir lo contrario, sería tanto como desdibujar la norma misma, en tanto se llegaría al absurdo de exigir que el padre o la madre deje de trabajar para acreditar una dependencia de cuidado específico y no meramente monetaria, lo que daría lugar a que después se afirme, que no acreditó la subordinación económica por cuanto se encuentra al cuidado exclusivo de su hijo.

Ese alcance que, no comparte la Sala, también dejaría sin piso la disposición legal en cuanto los progenitores no tendrían la posibilidad de trabajar ni de aportar al sistema, de modo que no alcanzarían a completar la densidad de semanas requeridas al efecto.

Esta Corporación, no avala tal antinomia bajo ninguna perspectiva, pues tal como lo adocrinó en la providencia CSJ SL785-2013, «la condición de tener un hijo en estado de invalidez comprobada que depende económicamente de ella (o de él), basta para que la ley le dispense el requisito de edad y le exija solo el mínimo de semanas requerido por el régimen de prima media, para que tenga derecho a gozar del citado beneficio pensional, de tal manera que pueda dedicarse al cuidado de su hijo sin perjuicio del ingreso económico indispensable para la supervivencia no solo del discapacitado sino del progenitor (...).»

En esa medida, se tiene que nada impide que un padre de familia también se ocupe, en forma exclusiva o mancomunada con su pareja, del cuidado de un hijo en condición de discapacidad y le brinde la atención requerida para su mejoramiento de vida, pues no solo la madre está capacitada u obligada a ofrecer esa protección como lo estereotipa la sentencia fustigada.

De lo precedente, dimana con claridad que al señor JOSÉ IVÁN GUTIÉRREZ YATE ciertamente le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez prevista en el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003; empero, y como con acierto lo determinó el *a quo*, al no encontrarse debidamente probada la fecha de desvinculación laboral del pretensor, la administradora del RPMPD está llamada a reconocer la prestación a partir del momento en que aquella se verifique y de acuerdo con los presupuestos legales contenidos en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 para la determinación del IBL y la cuantía de la prestación, circunstancia que conlleva la improcedencia de dispensar los intereses de mora consagrados en el artículo 141 del estatuto de seguridad social, pues no hay dilación por parte de la entidad administradora en el pago de las mesadas pensionales ordenadas.

Finalmente, necesario se muestra aclarar que esta prestación económica se reconoce sin perjuicio de que el gestor, en el *sub examine* señor GUTIÉRREZ YATE, eventualmente, renuncie a este beneficio y proceda a solicitar el reconocimiento de su derecho a la pensión

de vejez, en caso de que reúna los requisitos del sistema general de pensiones que le corresponda.

En consonancia con todo lo expuesto y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes descritas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia proferida el 06 de septiembre de 2022 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín tanto más cuanto que determinó acceder a los pedimentos promovidos por JOSÉ IVÁN GUTIÉRREZ YATE en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., con la aclaración anotada en precedencia.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en vista de que el fallo fue estudiado bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., no se impondrán costas procesales.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE


PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el 06 de septiembre de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por JOSÉ IVÁN GUTIÉRREZ YATE en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

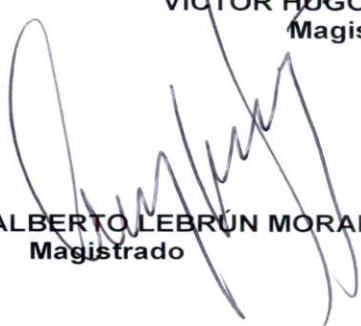
Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario